



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 002 2021 00182 01
Sentencia: S-221

AUTO

En atención a la escritura pública 716 del 15 de julio de 2020 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad PALACIO CONSULTORES S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial al Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, T.P. 194.214 del C. S. de la Judicatura.

Se accede además a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor de la Dra. ADRIANA MARÍA CORREA CARRASCAL, portadora de la T.P. N° 197.178 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal, con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a

resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 1 de octubre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ, demandó a COLPENSIONES y a PORVENIR S.A., para que una vez se declare que la primera incurrió en retardo en el reconocimiento de la pensión de vejez y la segunda lesionó su derecho a recibir la pensión desde que realizó la primera solicitud, sean condenadas de la siguiente manera:

“CONDENAS PRINCIPALES

*Como consecuencia de las declaraciones anteriores, solicitó al señor Juez se sirva condenar a **COLPENSIONES**, a reconocer y pagar al señor **JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ** C.C. N° 70.059.199 los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por el retardo superior a 4 meses en el reconocimiento de su pensión de vejez.*

*Se condene a **PORVENIR S.A.** a reparar el daño ocasionado al señor **JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ** C.C. 70.059.199 y pagarle una indemnización equivalente a la totalidad de los perjuicios sufridos por el hecho de no haber obtenido su pensión de vejez en el debido momento legal.*

Se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas”.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 3 de marzo de 1953; que es beneficiario del régimen de transición y cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez desde el 3 de marzo de 2013; que mediante sentencia judicial se declaró la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual y se ordenó el traslado de la totalidad de aportes recibidos, imponiendo como plazo para su cumplimiento los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia; que desde el mes de abril de 2019 solicitó a las demandadas el cumplimiento del fallo judicial; que el 30 de agosto de 2019 solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada según Resolución 270760 del 1 de octubre de 2019; que presentó recursos de reposición y apelación pero la entidad decidió confirmar lo resuelto previamente; que en varias oportunidades ha solicitado el cumplimiento de la sentencia, la corrección de historia laboral y la inclusión de las semanas cotizadas a PORVENIR S.A.; que el 10 de marzo de 2020 solicitó por segunda vez el reconocimiento de la pensión de vejez, el cual también fue negado por no acreditar le número mínimo de semanas de cotización; y que solicitó nuevamente la pensión el 21 de octubre de 2020, reconocida mediante Resolución SUB 20385 del 29 de enero de 2021 como beneficiario del régimen de transición y a partir del 16 de septiembre de 2017.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, PORVENIR S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda indicando haber cumplido cabalmente con todas las obligaciones respecto al que fuese su afiliado, en tanto procedió a realizar el traslado de las sumas existentes en la cuenta de ahorro individual luego de surtir todos los trámites previos necesarios para ese efecto. En cuanto a los hechos, acepta lo relacionado con la sentencia mediante la cual se declaró la ineficacia de traslado y el

cruce de comunicaciones con el demandante respecto del cumplimiento de ese fallo, advirtiéndolo que cualquier perjuicio que se reclame debe ser probado en el curso del proceso. Como excepciones de fondo propuso falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción, compensación y pago.

Por su parte, COLPENSIONES aceptó la fecha de nacimiento del demandante, lo relacionado con el proceso de ineficacia de traslado, las reiteradas solicitudes de pensión de vejez, los actos administrativos negando lo pretendido por no contar con el total de semanas mínimo y el posterior reconocimiento como beneficiario del régimen de transición, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso a las pretensiones ya que la procedencia de los intereses moratorios depende de la existencia de una pensión legalmente reconocida y que la entidad encargada de efectuar el pago haya incurrido en mora, lo que no ocurre en este caso. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación indexada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 1 de octubre de 2021, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 liquidados a partir del 31 de diciembre de 2019 y hasta el 1 de marzo de 2021 por valor de \$15`924.744. Condenó además a las costas del proceso y ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A. de la pretensión de indemnización de perjuicios.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación indicando que lo que se narra en el escrito de la demanda es que fue PORVENIR la que incurrió en error al no trasladar en su totalidad las semanas cotizadas por el demandante, produciendo que COLPENSIONES incurriera igualmente en error, ya que con la cantidad de semanas reportadas no era procedente el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, presentándose una falta de legitimación de la causa. El Consejo de Estado ha señalado la importancia de que se acredite los presupuestos de legitimación en la causa para que las partes puedan actuar dentro de un proceso, sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente 20146 del 19 de octubre de 2011 y expediente 19630.

Cita la sentencia de la Corte Constitucional C-601 del 25 de mayo del 2020, que establece la exequibilidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en el entendido de que los intereses son procedentes cuando una vez reconocida la prestación las mesadas respectivas no se pagan oportunamente, situación que no se ha presentado en este caso.

De otro lado, una vez se consultó el aplicativo y la historia laboral para diciembre de 2019, se evidencia que el señor JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ contaba con 783.86 semanas, quedando claro que no se puede imputar a la entidad un error que no es de ella, ya que según la historia laboral, para esas fechas de la reclamación no contaba con el requisito de tiempo de cotizaciones para serle reconocida la prestación, por tal razón no es dable la condena que el juez ha impuesto, por lo que solicita sea revocado el fallo proferido.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término de traslado concedido a las partes, el apoderado de PORVENIR S.A. presentó alegatos de conclusión a través de los cuales reitera haber cumplido a cabalidad con sus obligaciones como

administradora de pensiones, compartiendo así la decisión absolutoria de primera instancia.

A su turno, COLPENSIONES insiste en el hecho de que para el mes de diciembre de 2019 la historia laboral del demandante reflejaba 783.86 semanas de cotización, insuficientes para ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez reclamada, motivo por el cual no se le puede imputar error de ninguna naturaleza. Advierte que los intereses de mora están condicionados al examen o apreciación de elementos subjetivos relativos a la buena fe, por lo que no resultan aplicables en el presente caso.

CONSIDERACIONES:

Como viene de verse, el demandante JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ pretende el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, derivados de la tardanza de COLPENSIONES al momento de proceder con el reconocimiento de la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 758 de 1990.

Y aunque en la demanda también se pretendía el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a cargo de PORVENIR S.A., como no fue un tema cuestionado por la apoderada de la demandante mediante el respectivo recurso de apelación, el estudio en esta oportunidad se limitará al tema de los intereses moratorios que cuestiona la apoderada de la ACP COLPENSIONES.

Antes de cualquier consideración en torno al tema propuesto, conviene hacer un recuento de lo acontecido en el trámite administrativo para con ello establecer en definitiva el derecho que en este caso pueda existir. Hechos que en su mayoría han sido incluso aceptados por las demandadas y por ende no han sido materia del litigio.

i. El señor JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ nació el 3 de marzo de 1953, por lo que cumplió los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2013.

ii. Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2017, confirmada el 11 de octubre de 2018, se declaró la ineficacia de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP PORVENIR S.A., ordenando la devolución de todas las sumas recibidas en un plazo de 30 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia.

iii. El demandante solicitó el cumplimiento de la sentencia tanto a COLPENSIONES como a PORVENIR S.A. desde el 11 de julio de 2019.

iv. El 30 de agosto de 2019 solicitó la pensión de vejez, la cual fue negada por COLPENSIONES mediante Resolución GNR 270.760 del 1 de octubre de 2019. Decisión que fue confirmada luego de los recursos de reposición y apelación presentados por el hecho de no acreditar el número mínimo de semanas de cotización que exige la ley.

v. El 11 de febrero de 2020 presentó una nueva solicitud de cumplimiento y de inclusión en la historia laboral de las semanas cotizadas a PORVENIR S.A.

vi. COLPENSIONES respondió dicha solicitud remitiendo el requerimiento a ASOFONDOS.

vii. Una segunda solicitud de pensión de vejez radicada el 10 de marzo de 2020 también fue negada según resoluciones GNR 123622 del 9 de junio, SUB 183766 del 27 de agosto y 12995 del 24 de septiembre, todas del año 2020.

viii. Una tercera solicitud pretendiendo la pensión se radicó el 21 de octubre de 2020. Esta vez obtuvo el reconocimiento a través de la

Resolución SUB 20385 del 29 de enero de 2021, ordenando el pago de una mesada pensional de \$1'506.171 a partir del 16 de diciembre de 2017 y un retroactivo causado de \$58'864.204.

Vale destacar que ésta última Resolución fue emitida luego de que PORVENIR S.A. procediera con el traslado de los recursos de la cuenta de ahorro individual del afiliado y el detalle de los pagos realizados por cada empleador, lo que ocurrió el 12 de noviembre de 2020.

Lo primero que se debe advertir, como fundamento para resolver el recurso de apelación planteado, es que la norma que consagra los intereses moratorios propende por el pronto pago de las mesadas pensionales para así proteger los derechos de los pensionados frente a las dilaciones injustificadas en el trámite administrativo. Intereses que a la luz del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, son procedentes en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley y su pago se realizará a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

El sentido o conceptualización de los intereses moratorios en general, tiene que ver con que su causación se da una vez vencen los plazos pactados por las partes, u otorgados por la ley como en este caso acontece, a manera de sanción al deudor incumplido. Se incurre en mora, bien cuando no se ha cumplido la obligación dentro del término estipulado por la ley o el contrato o convención, o bien cuando la deuda debió ser ejecutada dentro de cierto tiempo, por haberse fijado un término o señalado un plazo para ello, y el deudor lo ha dejado vencer, sin cumplirla o ejecutarla. Eventos en los cuales se genera la obligación al pago de los intereses por mora, contrario a lo dicho por la recurrente-, como forma de reparación del perjuicio sufrido por el acreedor ante el incumplimiento del deudor, o simplemente ante su cumplimiento tardío, inoportuno o extemporáneo.

En el presente caso, según la prueba documental aportada al proceso, ha quedado acreditado que el demandante JOSÉ FERNANDO RUIZ PÉREZ se presentó ante COLPENSIONES a reclamar la pensión de vejez en una primera oportunidad el 30 de agosto de 2019, mientras que la prestación apenas vino a ser reconocida mediante resolución GNR 20385 del 29 de enero de 2021 y pagada al siguiente mes.

Sin embargo, con base en el recuento de las situaciones particulares que se presentaron en este caso, entiende la Sala que COLPENSIONES en su momento resolvió con un fundamento jurídico válido las peticiones iniciales del demandante y los respectivos recursos presentados al haber negado lo pretendido por no hallarse acreditadas las semanas de cotización que para el efecto exige la ley.

Es decir, contrario a lo que entendió el funcionario de primer grado, a juicio de la Sala sí existió una justificación válida para que la entidad de seguridad social se tardara en reconocer el derecho pretendido en este caso concreto, erigiéndose como una causal de exoneración de los intereses reclamados el hecho de haber negado la prestación en las primeras resoluciones por esa ausencia de traslado de aportes que le correspondía a PORVENIR S.A.

En ese entonces, tanto para el 30 de agosto de 2019 como para el 10 de marzo de 2020, así como dentro de los 4 meses subsiguientes, como PORVENIR S.A. no había cumplido la obligación que le correspondía, para COLPENSIONES no existía otro camino que negar la prestación al acreditarse solamente 783 semanas de cotización, sin que otra conducta pudiera exigírsele a la entidad pública de seguridad social que, en tal condición, está forzada a ceñirse estrictamente a los condicionamientos que impone la ley.

Fue solo con ocasión del pago en noviembre de 2020 derivado del cumplimiento de la sentencia dentro del proceso de ineficacia del traslado, que COLPENSIONES pudo proceder, en enero de 2021, a

reconocer la pensión de vejez del demandante teniendo claro el total de cotizaciones, así como el detalle de los ciclos pagados y el IBC reportado por cada empleador, información indispensable a la hora de proceder con el estudio de la prestación y liquidar el valor de la mesada pensional.

Es por ello que resulta aplicable el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a través del cual ha indicado que si la entidad tenía argumentos jurídicos valederos para adoptar determinada decisión y obró en virtud de los requisitos propios que exige la ley para tales efectos, no está obligada al reconocimiento de los intereses de mora que se reclaman. Así lo ha indicado en múltiples providencias como la 13388 del 1º de octubre de 2014, reiterada en la SL 2941 de 2016, SL 3707 del 1 de agosto de 2018, rad. 50665, la SL 4794 del 6 de noviembre de 2019 o la SL 5673 del 1 de diciembre de 2021, rad. 84517.

De manera concreta, en sentencia SL 12018 del 27 de julio de 2016, rad. 65746 se dijo lo siguiente:

“... esta Corporación, ha indicado, en lo que tiene que ver con la imposición de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que los mismos no son procedentes cuando el actuar de las administradoras, a efectos de negar las prestaciones que tienen a su cargo, encuentren justificación en la norma con la que se debía resolver el derecho, pues su actuar no se puede calificar de arbitrario o caprichoso. Es así como en sentencia CSJ SL 16390 2015 Rad. 40868, se anotó:

(...)

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas

condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia."

Ahora, esa misma Corporación ha señalado algunos casos concretos, pero no taxativos, en los que puede exonerarse a la entidad de tales intereses moratorios. En la sentencia SL 4794 del 6 de noviembre de 2019, rad. 75912, indicó, relacionando de modo amplio algunas hipótesis, lo siguiente:

"... si bien es cierto la Sala no ha gravado a las administradoras en algunos casos excepcionales por el referido concepto, esto ha obedecido a casos puntuales, entre los cuales se pueden enunciar las pensiones no reguladas por la Ley 100 de 1993 por cambio de criterio jurisprudencial (SL4650-2017), la nulidad por traslado de régimen (SL1688-2019), cuando al elevar la solicitud a la entidad no se cumplen los requisitos (SL3707-2018), en los casos de controversia entre beneficiarios (SL1399-2018), en eventos de reajuste o reliquidación pensional (SL738-2018), en el régimen de ahorro individual cuando el afiliado no ha informado la modalidad pensional de retiro escogida (SL2645-2016), las pensiones del Acuerdo 049 de 1990 causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (SL9316-2016), pensiones convencionales o acordadas en pactos colectivos (SL8544-2016), pensión de jubilación de que trata el artículo 260 del CST (SL5669-2016), entre otros, de lo que se deriva que en los demás casos, por regla general procede su pago."

Es justamente lo que ocurre en este caso, donde la decisión de COLPENSIONES no es de ninguna manera arbitraria o caprichosa sino fundamentada en la tardanza de PORVENIR S.A. en el cumplimiento de la sentencia en lo que a ella le correspondía, que era el traslado de los aportes recibidos durante la afiliación del demandante a esa entidad, de modo que, sin contar con los recursos ni la información de las cotizaciones realizadas, resultaba de cierta manera lógico que negara la pensión pretendida.

Lo anterior advirtiéndole también que el demandante contaba como alternativa con la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo con el fin de procurar el cumplimiento de la sentencia previa, lo que tampoco ocurrió.

En consecuencia, la decisión de primera instancia será revocada.

En su lugar y ante la necesidad de indexación de las sumas que sean susceptibles de serlo, a ello se accederá de manera subsidiaria.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia en sentencia SL 359 del 3 de febrero de 2021, adoctrinó que

“Es cierto que dicho ajuste no hizo parte de las pretensiones de la demanda, pero también lo es que, pese a ello, su imposición oficiosa es perfectamente viable porque la indexación no comporta una condena adicional a la solicitada.

En efecto, la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. (...)

Por lo visto, el juez del trabajo tiene el deber, incluso con el empleo de las facultades oficiosas, de indexar los rubros causados en favor de la demandante, lo cual, en vez de contrariar alguna disposición sustantiva o adjetiva, desarrolla los principios de equidad, justicia social y buena fe que tienen pleno respaldo constitucional; de paso protege la voluntad intrínseca del interesado, puesto que es impensable que desee recibir el crédito causado en su favor con una moneda depreciada.

En suma, la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad

del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral.

Por lo visto, a partir de esta sentencia la Sala fija un nuevo criterio, para establecer que el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa y, en tal sentido, recoge la tesis que hasta ahora sostenía, según la cual tal corrección monetaria únicamente procedía a petición de parte”.

En tal sentido, basta con señalar que de tiempo atrás se viene admitiendo por la jurisprudencia nacional la indexación de las obligaciones laborales, pues con tal mecanismo se procura que los créditos demandados judicialmente se actualicen con base en la depreciación monetaria calculada desde que la respectiva obligación se hace exigible, hasta el momento del pago efectivo. En este sentido, es claro que la demora en el pago de lo adeudado por concepto de mesadas pensionales, ha depreciado su valor por el solo hecho del transcurso del tiempo, pues no es igual pagarlas en el momento oportuno cuando se generó la obligación, que hacerlo tiempo después.

Lo anterior independiente de las razones para que la prestación no hubiese sido pagada a tiempo, pues lo que se busca con dicha indexación es, se insiste, que esos dineros que debieron pagarse tiempo atrás, se actualicen a valor presente.

Así entonces, es claro que existe una deuda de COLPENSIONES en tanto las mesadas reconocidas, por el mero transcurso del tiempo sufrieron un deterioro en su valor real y en tal sentido encuentra la Sala procedente indexar cada una de las mesadas pensionales reconocidas por la entidad demandada hasta la fecha en que se produjo su pago efectivo.

Vale advertir que para ello la Sala tiene en cuenta la fecha de exigibilidad de c/u de las mesadas pensionales causadas entre el 16 de diciembre de 2017 y la fecha respectiva de pago, y con base en ello se aplicó la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{valor a indexar} - \text{valor a indexar} = \text{valor indexación}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

- **ÍNDICE FINAL** correspondiente al IPC de la fecha en que se realizaron los pagos, el cual, en el presente caso, corresponde al mes de febrero de 2021 según se desprende del contenido de la Resolución SUB 20385 del 29 de enero de 2021.
- **ÍNDICE INICIAL** correspondiente al IPC vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada pensional.
- **VALOR A INDEXAR** que se refiere al monto de cada mensualidad acreditado con la misma Resolución SUB 20385.

Cálculo que asciende a la suma de **\$2´731.591** según se observa de acuerdo a la siguiente liquidación:

Período		IPC	Pensión	Indexación Pensión
2017	Diciembre	96,92	\$ 753.086	\$ 75.061
	Enero	97,53	\$ 1.567.773	\$ 145.518
2018	Febrero	98,22	\$ 1.567.773	\$ 133.503
	Marzo	98,45	\$ 1.567.773	\$ 129.428
	Abril	98,91	\$ 1.567.773	\$ 121.626
	Mayo	99,16	\$ 1.567.773	\$ 117.352
	Junio	99,31	\$ 1.567.773	\$ 114.750
	Julio	99,18	\$ 1.567.773	\$ 116.898
	Agosto	99,30	\$ 1.567.773	\$ 114.883
	Septiembre	99,47	\$ 1.567.773	\$ 112.111
	Octubre	99,59	\$ 1.567.773	\$ 110.092
	Noviembre	99,70	\$ 1.567.773	\$ 216.256
	Diciembre	100,00	\$ 1.567.773	\$ 103.159

2019	Enero	100,60	\$ 1.617.628	\$ 96.182
	Febrero	101,18	\$ 1.617.628	\$ 86.388
	Marzo	101,62	\$ 1.617.628	\$ 79.027
	Abril	102,12	\$ 1.617.628	\$ 70.667
	Mayo	102,44	\$ 1.617.628	\$ 65.375
	Junio	102,71	\$ 1.617.628	\$ 60.950
	Julio	102,94	\$ 1.617.628	\$ 57.200
	Agosto	103,03	\$ 1.617.628	\$ 55.737
	Septiembre	103,26	\$ 1.617.628	\$ 52.010
	Octubre	103,43	\$ 1.617.628	\$ 49.265
	Noviembre	103,54	\$ 1.617.628	\$ 94.989
	Diciembre	103,80	\$ 1.617.628	\$ 43.324
2020	Enero	104,24	\$ 1.679.098	\$ 37.693
	Febrero	104,94	\$ 1.679.098	\$ 26.241
	Marzo	105,53	\$ 1.679.098	\$ 16.707
	Abril	105,70	\$ 1.679.098	\$ 13.979
	Mayo	105,36	\$ 1.679.098	\$ 19.443
	Junio	104,97	\$ 1.679.098	\$ 25.754
	Julio	104,97	\$ 1.679.098	\$ 25.754
	Agosto	104,96	\$ 1.679.098	\$ 25.916
	Septiembre	105,29	\$ 1.679.098	\$ 20.572
	Octubre	105,23	\$ 1.679.098	\$ 21.541
	Noviembre	105,08	\$ 1.679.098	\$ 47.938
	Diciembre	105,48	\$ 1.679.098	\$ 17.511
2021	Enero	105,91	\$ 1.706.131	\$ 10.793
	Febrero	106,58	\$ 1.706.131	\$ -
				\$ 2.731.591

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

Primero: REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Medellín, el día 1 de octubre de 2021 en cuanto ordenó el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para en su lugar ABSOLVER a la entidad demandada por este concepto.

Segundo: CONDENA a la ACP COLPENSIONES, a reconocer y pagar a la demandante, en su lugar, la indexación de las mesadas pensionales reconocidas mediante resolución SUB 20385 del 29 de enero de 2021, ordenando como pago por este concepto la suma de \$2'731.591

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **65b5b9611796d6688dd8b3ba35564b9954439b52d0956cca990bcbe5265145d9**

Documento generado en 25/08/2022 10:16:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>